



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, nueve (09) de octubre de 2020

Auto Interlocutorio nro. 101

MAGISTRADO PONENTE: RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - OTROS
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-00200-00
DEMANDANTE:	HAROLD EFRAIN IMBACHI GUERRERO
DEMANDADO:	NACIÓN – MINDEFENSA – POLICÍA NACIONAL
ASUNTO	REMITE POR COMPETENCIA

I. ANTECEDENTES

El señor Harold Efrain Imbachi Guerrero a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, solicita se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Fallo de primera instancia de fecha 29 de mayo de 2019, proferido por el Inspector General de la Policía Nacional.
- Fallo de segunda instancia de fecha 26 de junio de 2019, proferido por el Director General de la Policía Nacional.
- Resolución nro. 4849 del 23 de agosto de 2019 *“Por la cual se ejecuta una sanción impuesta a un oficial subalterno de la Policía Nacional en cumplimiento de un fallo disciplinario”*.

A título de restablecimiento del derecho solicita el reintegro inmediato en el grado y cargo que de acuerdo a su antigüedad corresponda sin que se predique solución de continuidad, reconociendo los ascensos que conforme con su trayectoria institucional deban conferírsele.

Ahora bien, respecto a la cuantía debe indicarse que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en providencia del 30 de marzo de 2017¹ planteó una nueva tesis sobre la distribución de competencia en asuntos disciplinarios:

“(…)

3.1 Competencia para conocer de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos dictados en ejercicio del poder disciplinario por otras Ramas, Órganos y Entidades del Estado distintas de la Procuraduría General de la Nación con cuantía.

¹ C.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, radicado: 111001032500020160067400 (2836-2016)



En este acápite se establecerá la competencia para el conocimiento de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos expedidos por las autoridades administrativas de los diferentes órdenes, distintas de la Procuraduría General de la Nación, con cuantía, estos son, los que imponen las sanciones de (i) Destitución e inhabilidad general; (ii) Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad; (iii) Suspensión, o (iv) Multa.

De la lectura de los artículos 149 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala considera que, conforme con el numeral 3 del artículo 152 ibídem, las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que imponen las sanciones de i) Destitución e inhabilidad general; (ii) Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad; (iii) Suspensión, o (iv) Multa, expedidos por las autoridades administrativas de los diferentes órdenes, distintas de la Procuraduría General de la Nación, con una cuantía superior a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, son de competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.

Para la Sala, la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 152 citado puede aplicarse perfectamente como una regla especial de competencia para las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en las que se controvierten asuntos disciplinarios con una clara distinción: entre (a) los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación diferentes al Procurador General de la Nación, sin atención a la cuantía, y (b) los funcionarios de cualquier autoridad (todas las autoridades del orden nacional, departamental, distrital y municipal) diferentes a la Procuraduría General de la Nación, cuando la cuantía exceda de 300 SMLMV.

En efecto, el artículo 152 numeral 3 señala:

“Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[...]

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación.

[...]”

Para la Sala, este numeral corresponde claramente a la regla de competencia para demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos, entre otros, de carácter sancionatorio. Es importante precisar que esta clase de asuntos, los administrativos sancionatorios, no tiene una disposición expresa, como sí la tienen en este artículo los relativos a contratos, laborales o tributarios, entre otros. En este sentido, y sin excluir otros asuntos, puede interpretarse como una disposición completa en materia de competencia para asuntos



sancionatorios disciplinarios, así: para las sanciones disciplinarias, con cuantía, emanados de cualquier autoridad, y, sin atención a la cuantía para las sanciones disciplinarias expedidas por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes del Procurador General de la Nación.

La segunda instancia de estos asuntos son de competencia del Consejo de Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Coherente con lo anterior, cuando se trate de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias, con cuantía inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedidos por autoridades de cualquier orden, sea nacional, departamental, distrital o municipal, conocerán los jueces administrativos en primera instancia, conforme con el numeral 3 del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

[...]

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En segunda instancia conocerán los tribunales administrativos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Conforme con lo anterior, respecto a la competencia en asuntos en los que se ventilen pretensiones de nulidad y restablecimiento por la imposición de sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad o suspensión, incluso la multa, por autoridades distintas a la Procuraduría General de la Nación, como en el presente caso, **el factor objetivo de la cuantía determinará el juez competente para conocer del proceso**; por lo que, para que ésta Corporación pueda conocer de aquellos asuntos en primera instancia, deberán superar el monto de 300 smlmv, como lo dispone el artículo 152 numeral 3 del CPACA.

Por su parte, el artículo 157 del CPACA señala:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. <Ver Notas de Vigencia> Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.



Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

(...)

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

(...)"

En este asunto la parte demandante estimo la cuantía en treinta y un millones setecientos seis mil ciento seis pesos moneda corriente (\$ 31.706.106²), lo que resulta inferior a 300³ smlmv⁴, por lo que debe darse aplicación al numeral 3 del artículo 155 del CPACA y en consecuencia, la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos de Cali.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168⁵ del CPACA se ordenará remitir el expediente por competencia al Juez Administrativo del Circuito de Cali – Reparto, quien deberá observar el inciso tercero del artículo 139⁶ del CGP aplicable por remisión expresa del artículo 306⁷ del CPACA.

En consecuencia,

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA en razón de la cuantía para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

² Ver folio 31

³ \$877.803 (salario mínimo año 2020) x 300 = \$263.340.900

⁴ Consejo de Estado – Sección Primera, 31 de mayo de 2019, Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Radicación número: 11001-03-24-000-2019-00124-00. En un asunto similar estableció: "En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 155, numeral 3, del CPACA, el proceso es de conocimiento de los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali, teniendo en cuenta que la pretensión económica de la actora no excede de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales y que los hechos por los cuales se impuso la sanción ocurrieron en la ciudad de Cali".

⁵ ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión

⁶ ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. (subrayas fuera de texto).

⁷ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



Radicación : 2020-00200-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - OTROS
Demandante : HAROLD EFRAIN IMBACHI GUERRERO
Demandado : NACIÓN-MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL

5

SEGUNDO.- REMITIR por competencia en razón a la cuantía el presente medio de control a los Juzgados Administrativos Orales de Cali - Reparto, quien deberá atender lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 139 del Código General del Proceso.

TERCERO.- Por Secretaría de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en el sistema Justicia Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado